

Venezuela, Memorias desde el subsuelo

Héctor Silva Michelena

ME APROPIO, CON PESAR, DEL TÍTULO DE LA GRAN NOVELA DE DOSTOYEVSKI para rememorar a grandes rasgos el pasado socioeconómico de mi país, y para presentar con algo más de detalle la grave crisis que vive Venezuela en todos los órdenes de la vida social: económica, política, cultural, de identidad, institucional, de corrupción y de cohesión social. Que yo recuerde, desde las guerras federales del siglo XIX, azotadas por el caudillismo y la inestabilidad, nunca antes este país había vivido tal grado de fractura en su población y de gobernabilidad en un ambiente democrático.

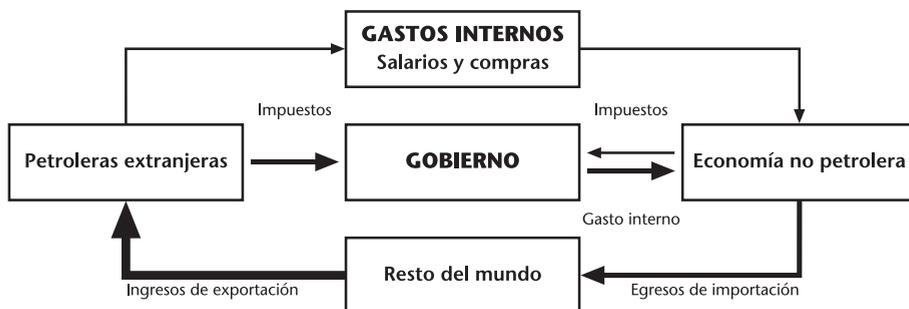
Para hacer memoria, recordemos brevemente la evolución económica del país.

Medida en términos de crecimiento del producto interno bruto total, por una parte, y per cápita por la otra, la velocidad del crecimiento es patente cuando se observa que la tasa de expansión promedio interanual entre 1950 y 1960 fue de 7,9 por 100, y la del PIB per cápita fue de 3,7 por 100. Entre 1960 y 1970 esas tasas fueron de 6,0 por 100 y 2,2 por 100 respectivamente; entre los años 1970 y 1980, las tasas fueron de 4,1 por 100 y 0,6 por 100. Este ritmo contrasta con el logrado en la década siguiente (1980-1990), cuando aquellas tasas fueron de 0,6 por 100 y -1,9 por 100, cifra negativa, que en el presente se ha agravado; entre 1990 y 1998, ambas tasas fueron de 4 por 100 y -1,8 por 100. A partir de 1999, cuando comienza el período de Chávez, el quinquenio 1999-2003 (de un período ahora septenal) muestra una caída media del PIB de -3,79 por 100 y del PIB per cápita de -5,59 por 100. Las cifras son elocuentes si se toma en cuenta que el precio del barril petrolero venezolano alcanza en este lapso a un promedio de 21,03 dólares, únicamente superado por el segundo *boom* petrolero de 1979-1983.

Cabe señalar además que el porcentaje de analfabetos disminuyó del 50 por 100 al 15 por 100, entre 1959 y 1971, y a menos del 8 por 100 en 1999. Los porcentajes de escolarización en todos los niveles se multiplicaron por más de seis, la reforma agraria (1959-1969), que no logró su pleno cometido, disminuyó sin embargo los grandes latifundios en un 50 por 100, y suprimió el trabajo semi-servil prestado por precaristas y aparceros, particularmente mujeres y niños. Ellos pagaban un tributo al gran propietario absentista.

Este cuadro, como se dijo, cambió radicalmente, y dio paso a períodos de industrialización y desarrollo general, junto con mejoras en la distribución del ingreso, que trataremos más adelante.

CIRCUITO MONETARIO DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA PARA 1973



Nota: El espesor de las flechas indica la importancia de los flujos.

El anterior gráfico muestra un esquema simplificado de la economía venezolana para la fecha indicada.

BREVE RECUENTO DEL PERÍODO ANTERIOR A CHÁVEZ (1974-1998)

Mil novecientos setenta y cuatro marca un año muy importante porque se corresponde con una fuerte alza en los precios del petróleo, con el consiguiente influjo de divisas que sirvieron para expandir considerablemente el gasto público. Para esa época, el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) ya había superado la llamada etapa fácil: el reemplazo de bienes de consumo de producción nacional, que encontraban suficiente demanda en un mercado cautivo debido al alto proteccionismo, no sólo arancelario sino también para-arancelario, lo cual incluía importaciones reservadas al gobierno. En este sentido, puede decirse que Venezuela era una economía cerrada. El reto que se planteó al gobierno de Carlos Andrés Pérez fue el de vencer esa etapa. Apoyado en el *boom* petrolero y en la onda nacionalista árabe, a finales de 1975, se nacionalizó el petróleo, paso importante para la progresiva formación de un enorme sistema de empresas financieras y no financieras del estado, entre las cuales destacan la siderurgia, el aluminio, la petroquímica y la metalmecánica. El reto de ese gobierno era transformar una enorme riqueza nominal en riqueza real o productiva. El gobierno emprendió de esta manera los megaproyectos de sus grandes empresas antes mencionadas, y el financiamiento de una industria en la que se mezclaban el capital nacional y el internacional. El crecimiento de las importaciones de bienes de capital fue considerable, aunque los bienes de consumo sofisticados también crecieron, por la gran dilatación de la clase media. La corrupción, hasta ahora moderada, dio un salto importante, y

puede decirse que continuó creciendo hasta 1998. Esas grandes inversiones, que maduran lentamente, no encontraron mercados interiores para sus productos, por lo que la capacidad ociosa era alta. Fue un período de considerable sobre-inversión, elemento clave de la larga crisis que se inicia en los años 76-77. A esto se agrega un paradójico endeudamiento externo contraído para financiar no sólo los megaproyectos, sino inversiones y considerables ayudas al Caribe insular y a Centro América (por cierto, la destitución de Carlos Andrés Pérez en su segundo período, se debió a una ayuda de 200 millones de dólares a la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro). El alza importante de las tasas de interés en los EE.UU. incrementaba acumulativamente aquella deuda externa, hasta convertirla en una carga que aún soporta el país.

Después del primer gobierno de Pérez, asciende al poder Luis Herrera Campíns, quien trató de hacer en sus primeros dos años un gobierno liberal y de enfriamiento de la economía; el resultado fue un fuerte estancamiento, pérdida de confianza y una masiva fuga de capitales que bajaron las reservas internacionales a un nivel muy precario. Venezuela, como país petrolero, nunca sufrió del estrangulamiento externo típico de los países latinoamericanos, excepto México. Ese nivel precario en materia de reservas internacionales (tenencia de divisas, oro y derechos especiales de giro del FMI) llegó a menos de 600 millones de dólares; es decir, cubrían sólo quince días de importaciones, cuando lo normal era garantizar la cobertura al menos de ocho meses. Obligado por esta situación, el gobierno abandonó casi veinticinco años de estabilidad cambiaria. Se produjo una fuerte devaluación del bolívar y se introdujeron controles de cambio, de precios y de las tasas de interés. Es decir, que de una economía liberal se pasó sin rubor a una economía ampliamente administrada, que duró hasta 1988. En esos dos períodos, pero particularmente en el de Lusinchi, la corrupción se hizo casi insolente, sobre todo a través del régimen de cambios diferenciales (RECADI), que provenía del período anterior. Ese proceso es fácil de comprender: se adquirían dólares preferenciales con falsas facturas, que luego eran vendidos en el mercado libre al doble de su precio.

Al agravamiento de la situación se sumó la violenta caída de los precios del petróleo. Continuaron sucesivas devaluaciones que metieron al país en el círculo vicioso de devaluar —generar utilidades cambiarias— alza del gasto público —inflación— nueva devaluación, y así...

El impacto social fue importante, ya que la pobreza, que era apenas del 5 por 100 en 1973, llegó a casi 30 por 100 al final de ese período. Cundió el desempleo femenino y el de jóvenes y adolescentes. Los programas sociales se retrasaron y no funcionaron; el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), adonde iban las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, se convirtió en una caja chica del gobierno y botija de depredación. En 1989, asciende al poder nuevamente Carlos Andrés Pérez; su programa de gobierno, de neto corte neoliberal, era sólo conocido por jóvenes tecnócratas que ocuparon las carteras ministeriales. Su propio partido, Acción

Democrática (AD), lo desconocía; el partido manejaba un típico programa socialdemócrata de recuperación. La introducción violenta del neoliberalismo, en el cuadro del llamado ajuste estructural y del Consenso de Washington, provocó una violenta reacción de la población, tanto que los motines callejeros, saqueos y disturbios fueron controlados por el ejército, en forma claramente desproporcionada. Poco después, ocurrió el golpe del 4 de febrero de 1992 encabezado por Chávez; el golpe fracasó. Pero el descontento continuó en el pueblo y en sectores importantes de las fuerzas armadas que, el 27 de noviembre de ese mismo año, lanzaron otro golpe que también fracasó. Es claro que la actividad económica decayó fuertemente, lo cual se prolonga hasta 1993. La crisis política que se había desatado en 1992 desembocó en el nombramiento de un gobierno provisional en mayo de 1993, luego de la suspensión del presidente Pérez. Si bien ello aplacó la tensión política, el carácter provisional de las nuevas autoridades abrumó de incertidumbre económica y social no sólo al país, sino a sus socios internacionales. Nuevas declinaciones del precio del petróleo crearon graves crisis fiscales y cambiarias, se aplicó una política monetaria restrictiva y la inflación se disparó a cifras cercanas al 35 por 100. El desempleo desde luego aumentó, aunque lo amortiguó un poco el sector servicios, ya que el sector manufacturero y otros sectores productivos se estancaron o cayeron bruscamente. Los servicios sociales continuaron decaídos a pesar de los esfuerzos por establecer y definir una política social hasta ahora ausente. El año 1994 marca el comienzo de la segunda administración del presidente Caldera, quien recibió una economía profundamente trastornada en todas las áreas. La inflación superó el 70 por 100 a finales de 1994, que sería superada en el año 96 cuando llegaría al 103 por 100 al aplicarse una nueva política económica que suprimió los controles de cambio, tal como había ocurrido en 1989. El período 94-95 está marcado por una profunda crisis financiera y de solvencia de 11 instituciones bancarias que representaban un 35 por 100 de todo el subsistema de la banca comercial. La fuga de capitales fue considerable, ya que los auxilios financieros otorgados a la banca a través del Fondo de Garantía de los Depósitos Bancarios (FOGADE), llegaron alrededor del 11 por 100 del PIB. De la banca pasaban al público demandante (constituido por la misma banca, las grandes y medianas empresas y ahorristas de toda laya, y terminaban en el mercado dólares para enviarlos al exterior. El déficit fiscal (6% del PIB) apenas pudo ser financiado con títulos de la deuda, la cual sólo pudo colocarse adoptando los programas de ajuste del FMI.

EL ASCENSO DE CHÁVEZ

En una campaña dirigida fundamentalmente contra la corrupción, de la que se acusaba no sin razón a los partidos AD y COPEI, Chávez gana las elecciones en diciembre de 1998 con una amplia votación popular, aunque la abstención superó el 36 por 100. Su propuesta fundamental fue la de refundar al país mediante la aprobación de una nueva Constitución, que fue aprobada

mediante plebiscito en diciembre de 1999. La Asamblea Nacional tenía una mayoría chavista casi absoluta. La Constitución recogió importantes avances del derecho constitucional, particularmente en lo relativo a la definición del régimen económico (economía mixta), libertades económicas, derechos sociales y la reserva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a la exclusiva propiedad del estado. Se introdujo el Referéndum Revocatorio de cargos de elección popular. En la Constitución no se habla de revolución de ningún tipo.

Al iniciarse el gobierno, se inicia un período de transición, que estuvo marcado por una profunda recesión económica (-6,1 por 100), pero las expectativas favorables al gobierno se sostuvieron porque sus promesas de bienestar fueron creíbles en el corto plazo. Se lanzó un plan de desarrollo económico y social 2001-2007, en el cual, hasta 2003, se cumpliría lo que llamaron «la época de plata», para pasar luego a «la época de oro». Ese plan se vino abajo a fines de mayo de 2002, ante los pobres resultados que se estaban obteniendo. Es verdad que en el año 2000 los objetivos estimados fueron ligeramente superados por los observados, en términos de crecimiento e inflación, pero a partir de 2001, la situación se invierte consistentemente; en particular, en los años 2002 y 2003 las caídas del PIB (-8,5 por 100 y -9,2 por 100 respectivamente) y la inflación resultó mucho más alta. La promoción de las exportaciones no petroleras, en lo cual se hizo muchísimo énfasis (Chávez llegó a decir: nosotros no necesitamos del petróleo) cayeron sostenidamente de 1998 hasta 2003: su participación en las exportaciones totales fue de 31,2 por 100 en 1998 y de 19,1 por 100 en 2003; mientras tanto, la participación de los bienes de consumo en las importaciones totales crecía año a año hasta culminar en un 20 por 100 en 2003, cuando en 1998 era del 14,2 por 100. El plan se abandonó y fue sustituido por un paquete de ajustes de corte neoliberal. Desde luego que la huelga cívica de diciembre de 2002-enero 2003 afectó negativamente a toda la actividad económica.

El fracaso del paro fue posible por el fuerte apoyo de la Fuerza Armada, que arremetió contra toda la sociedad y, en especial, contra instituciones fundamentales, como PDVSA, Fedecámaras, que agrupa a los propietarios de la economía privada, y muy sensiblemente a la alta dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) (su presidente se encuentra en el exilio). El paro fue consecuencia de la desastrosa política económica y social que afectó a una gran mayoría de la población; se lograron concentraciones masivas de más de un millón de personas (medidas por planimetría). PDVSA no se ha recuperado; su producción de crudo, que era de 3,2 millones de barriles diarios (mbd), no tiene capacidad para producir más de 2,6 mbd, de los cuales 1 mbd es producción asociada a las transnacionales. Los números del gobierno discrepan continuamente de las cifras suministradas de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y otras grandes empresas observadoras del mercado mundial. El presidente de PDVSA afirma que este año entregará al fisco \$20 millardos, lo cual es considerado gravísimo por los principales especialistas nacionales e internacionales. Eso sólo sería posible descapitalizando las empresas del holding petrolero y disminuyendo su

capacidad de producción. Klaus Rehaag, director de petróleo y gas de la AIE, señaló el 12 julio que Venezuela había perdido 500 mil barriles por día de su producción, debido a la fuerte caída de inversiones de esta industria de capital intensivo; agregó que el país ya no sólo dejó de invertir para compensar la declinación natural de los yacimientos, sino que además se está perdiendo producción; la recuperación no será rápida; la Comunidad Internacional espera estabilidad política para invertir, y aseguró Rehaag que la mayor desinversión en Venezuela se verifica en las actividades de exploración y perforación. Desde luego, los ingresos fiscales no serán suficientes para financiar por sí solos la recuperación; no obstante, se prevé que los precios se mantendrán altos por lo menos hasta 2005. La aplicación de un control de cambio estricto, ha hecho caer las importaciones de todo tipo y crecer las reservas internacionales a niveles muy altos (\$25 millardos), que han caído a 20 porque la ocupación de la empresa por el chavismo está desviando los fondos para financiar proyectos sociales proselitistas del gobierno sin ningún control.

Le hemos dedicado algún tiempo a esta industria porque es la columna vertebral de la economía venezolana. Pero cabe mencionar que sin políticas para manejar la inflación, y la ausencia de coordinación entre lo fiscal y lo monetario ha repercutido negativamente sobre las manufacturas; cerraron en el período bajo estudio casi 7 mil empresas, es decir el 61 por 100 del parque industrial. En el primer trimestre de 2004, el PIB fue el más elevado en los últimos diez años (29,8 por 100), resultado de un rebote estadístico en especial del salto de la producción petrolera (72,5 por 100); pero esto no ha sido suficiente para alcanzar el nivel de actividad de 1994. Desde 1959 a 1998 el PIB industrial creció sostenidamente a una tasa quinquenal de 26 por 100 mientras que en el actual gobierno se ha contraído en 28 por 100 en los cinco años de su ejercicio. Aquel rebote no es sostenible, no representa una recuperación, por cuanto la inversión total permanece muy baja, en particular la privada. Ese crecimiento es más bien un espejismo económico.

LOS EFECTOS SOCIALES

Han sido verdaderamente muy sensibles, según todos los indicadores. Al concluir el 2003, la tasa oficial de desempleo era de 16,87 por 100 (14,4 en los hombres y 20,3 por 100 en las mujeres), la más alta desde la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958. La cifra del período precedente fue de 10,5 por 100. En cinco años de gobierno de Chávez, se han generado 728 mil nuevos desempleados, según cifras oficiales. La remuneración promedio de los hogares sigue cayendo, por lo cual la fuerza laboral de personas de entre quince y veinticuatro años de edad y de mujeres, buscan compensar sus ingresos por la vía del aumento del número de trabajadores por hogar, incluidos jóvenes y niños. Pero la opción que han encontrado es la economía informal (buhonería, vendedores ambulantes, doble jornada y mendicidad). Este tipo de economía representa el 53 por 100 del mercado de trabajo, la más alta en la historia del país.

La pobreza aumentó a 70,5 por 100 entre 1998 y 2003; ante tal aumento, casi 11 millones de venezolanos comen sólo una vez al día, y el 28 por 100 de la población, es decir 7 millones de personas hacen menos de tres comidas al día. Sin exagerar, puede afirmarse que la montaña de miseria creció considerablemente en el período de Chávez. La canasta alimentaria está en un 70 por 100 por encima del salario mínimo (abril, 2004). Según el Banco Central de Venezuela, la canasta básica en mayo de 2004 fue de más de 630.000 bolívares, mientras que el salario mínimo apenas era de 296.500, y a partir del 1 de agosto, llegará a 321.200 bolívares, y seguirá por tanto siendo insuficiente traducido en dólares: será de 116 dólares desde el 1 de agosto en el mercado paralelo y en el controlado de 167. La situación de pobreza extrema se agravó también, pues pasó de 19 por 100 en 1998, a 32,5 por 100 en 2003. En 1974, Venezuela tenía una pobreza total del 5 por 100 y una pobreza extrema inferior al 1 por 100. Esto revela un proceso de empobrecimiento de una velocidad incomparablemente superior a la de cualquier país en el mundo. Se sabe que las más afectadas han sido las mujeres, los adolescentes y los niños. En Venezuela, la mujer en los sectores más pobres se mueve alrededor del 70 por 100 de los casos como cabeza de familia (la media nacional es de 30% de jefatura femenina), lo cual contribuye a la reproducción de la pobreza. Si a esto se agrega el embarazo precoz (menores de diecinueve años), estimado en el 21 por 100, tendremos una idea de la tremenda precariedad en la que vive la población venezolana, y el porqué la llamada revolución bolivariana ha sido un rotundo fracaso. En cuanto a vivienda, el 55,8 por 100 de los hogares en pobreza extrema viven entre 4 y 6 personas, y el déficit habitacional es el 1,8 millones de viviendas; los planes del gobierno eran entregar 159 mil unidades, pero sólo entregó el 50 por 100 según el Consejo Nacional de la Vivienda. El problema habitacional requiere de recursos de 500 millones de dólares. Se necesitarían veinte años para volver a la Venezuela de los 70, y para volver a los niveles de 1998 se necesitaría un crecimiento promedio interanual de 5 por 100 durante cuatro años consecutivos. Para recuperar el ingreso per cápita de los hogares esa tasa, debería ser del 8 por 100.

La educación merece un párrafo especial, por cuanto es el vehículo fundamental de la propagación de la ideología autoritaria, la cual se manifiesta en el control por Chávez de todos los poderes públicos. El instrumento que está usando el gobierno son las llamadas «misiones». La investigadora Mabel Mundó de la UCV, en un estudio especial, determinó que las misiones son coyunturales y no resuelven el grave problema de exclusión que existe en Venezuela, y por eso no resultan las más acertadas como política pública. Mundó divide en dos períodos la política educativa del gobierno de Chávez: desde 1999 a mayo de 2003 y a partir de esa fecha, el segundo, que tiene como eje principal las misiones. Sostiene que en el primer período los programas educativos fracasaron: las mismas comunidades educativas se dieron cuenta de que eran necesarias para el mantenimiento de las escuelas porque el gobierno no garantizaba la dotación de las mismas. En cuanto a las escuelas bolivarianas, son pocas y las propias comunidades las ven como

elitistas, pues todos los estudiantes no pueden ingresar. El gobierno ha hablado de gran matriculación y asignación de recursos, pero ha callado sus debilidades: no ha resuelto la repetición y la deserción escolar, que son claves para evitar la exclusión, y a ello se agrega que las niñas por primera vez dejan de ser enviadas por sus madres a la escuela para incorporarse ellas al trabajo. En cuanto a las misiones, Mundó señala, que sólo encontró que la única que tiene gran respaldo es la misión Robinson de alfabetización, del resto se consigue poquísima información. En esa misión como en otras (Ribas de acceso al bachillerato en dos años, la enseñanza se basa en vídeos cubanos, que son seguidos al pie de la letra, sin tomar en cuenta que Venezuela es un país de características muy distintas: este país es en un 87% urbano y su grado de analfabetismo, en 2004, era de sólo el 8%). Por eso estas misiones van en contra de los derechos del niño, que deben estar en las instituciones regulares y no en un sistema paralelo que no tiene ningún tipo de control. La investigadora encontró que muchas personas participan en las misiones con un interés que no es el educativo; un mínimo porcentaje de los egresados piden continuar sus estudios y lo que más solicitan es empleo, asistencia médica, vivienda, ayuda y seguridad social.

Está claro que el objetivo de estas misiones educativas es ejercer un control social sobre quienes a ellas asisten: niños, jóvenes y adultos; la totalidad de sus datos personales (identidad, huellas, direcciones, etc.) es tomada y controlada directamente por la presidencia de la República, que es la única que las controla. Nótese que el problema del desempleo no tiene ninguna «misión» especial asignada para atenderlo; en las «misiones» educativas y de salud se les da unos 50 dólares a los participantes.

Por último, la seguridad social, que tiene tanta importancia para la asistencia directa a la población, tiene una mora de año y medio en la Asamblea Nacional, dominada hasta ahora por un oficialismo que sí tuvo tiempo para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de elegir a los magistrados por mayoría simple y no calificada, violando su propio Reglamento Interno y a la Constitución Nacional, pero que no ha terminado el diseño de las nuevas estructuras que aprobó el 30 de diciembre de 2002 en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social; el compromiso era crear esa estructura en el transcurso de 2003, sin que ninguno de los regímenes prestacionales (salud, pensiones, servicios al adulto mayor, empleo, vivienda y hábitat y medio ambiente de trabajo) haya ido más allá de su enunciación en dicha ley. La demagogia característica de las tiranías desde la antigüedad grecolatina se ha hecho aquí presente. En la Constitución se prevén esos regímenes como obligatorios, pero estimaciones hechas por el Ministerio de Finanzas muestran que su costo asciende al 11 por 100 del PIB actual. Esto es absolutamente insostenible e incumplible a medio plazo. Las proyecciones que observé en la suprimida Oficina de Asistencia Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, creada por el Congreso Nacional en 1998, con convenio del BID, me permitieron comprobar que la curva ascendente de estos gastos alcanzaría a un 20 por 100 del PIB en 2010. El presupuesto no lo podría soportar.

CONCLUSIONES

Un importante analista norteamericano, Michael Rowan, acaba de publicar un largo análisis acerca de las expectativas frente al referendo y al futuro del país: el título de su análisis lo dice todo «Tiempo de aceitar las armas». Rowan asegura que es mucho más probable que estalle la violencia a que se dé el propio proceso electoral en agosto, ya que está fuera de las manos de la sociedad civil. Dice que todo está bajo el control de los extremistas de ambas partes que no tienen soluciones para nadie, salvo para ellos mismos. Opina que está preparado el escenario para una confrontación entre un presente y un pasado, ambos fracasados; una situación asombrosa. Nosotros no compartimos tal opinión, pues para que se dé una guerra civil, tiene que darse una situación que los politólogos califican de «equilibrio catastrófico», es decir, que las partes en confrontación han de tener el mismo poder de fuego, como ocurrió en la guerra civil española. En Venezuela, el desequilibrio es evidente: Chávez tiene en sus manos todo el poder de fuego de la Fuerza Armada alta y media, a la que ha obsequiado todo tipo de prebendas: ascensos vertiginosos a generales en jefe (no existían desde 1939), condecoraciones, remuneraciones, protección social, vivienda y otros privilegios. Cuenta además con una importante fuerza de milicianos armados, entrenados por agentes cubanos, cifrados en unos 15 mil. Esta es una situación de gran desequilibrio. La sociedad civil opositora deberá seguir el camino emprendido apegada a la Constitución, buscando la solidaridad internacional (fue muy importante en la derrota de Pinochet) y ofrecer al país un programa creíble de recuperación de sus problemas fundamentales: el fin de la fractura social, de la ingobernabilidad, de la vigencia plena del estado de derecho, de respeto e independencia de los poderes y a todas las instituciones públicas y privadas, y muy particularmente aplicar de manera decidida planes concretos de enfrentamiento a la pobreza y a la exclusión, pasando de las sectarias misiones a una política social para todos, con la participación de estado, sociedad y sector privado. Esto debe estar en el centro de una agenda de transición, sin ella no es posible lograr el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de la población. Debe volverse a un mecanismo tan democrático como la descentralización de las competencias públicas territoriales, gravemente afectadas por una vuelta al centralismo predictatorial. Ha de tenerse presente que los problemas sociales tienen rostro humano, por lo cual consideramos necesario impulsar una participación más activa de las organizaciones e instituciones locales que están más preparadas para abordar y resolver los problemas. Cabe informar que el domingo 25 de julio, la oposición democrática venezolana presentó al país un documento unitario para la gobernabilidad que se denomina «Acuerdo Nacional por la Justicia Social y la Paz Democrática», cuya propuesta central es la construcción de una nueva democracia y la erradicación del odio y el sectarismo. Insiste el documento en que la UNIDAD es el anhelo de la mayoría de una población que se resiste a que nuestro país se desintegre en una guerra fratricida. Enumero sus líneas estratégicas: atención a la

urgencia social, nueva política económica y petrolera, reformas políticas y constitucionales, administración de justicia, igualdad ante la ley y lucha contra la corrupción y, finalmente, las relaciones internacionales. Para garantizar la viabilidad, estabilidad y eficacia del Gobierno de Unidad Nacional, las organizaciones de la oposición democrática acuerdan presentar un candidato unitario a la presidencia de la República, seleccionado a través de un proceso de elecciones primarias y quien se compromete al país a no aspirar a la reelección inmediata. La acción de dicho gobierno de transición se enmarcará en la propuesta y visión de Venezuela que está contenida en el Plan CONSENSO PAÍS presentado a la nación por este mismo sector.

En síntesis, la gestión económica y social de Chávez es la peor de los últimos cincuenta y cinco años. En un Foro del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), realizado el 16 de julio de 2004, se acaba de comprobar que en la actualidad, el PIB por habitante se ubica con el 22,1 por 100 por debajo del que se percibía en 1988 y que se requerirá hasta 2012 para que se vuelvan a alcanzar los niveles de actividad económica que había en el país a fines de los 80. En los años 50, la economía venezolana logró niveles de crecimiento anual del 8,5 por 100; luego con la democracia se mantuvo en aumento aunque en menor variación, y desde 1999 la actividad productiva ha estado caracterizada por una constante contracción. En los dos primeros trimestres de 2004, se ha logrado un promedio entre el 8 y el 10 por 100 cuyo principal combustible hasta el momento es el gasto público que a su vez se soporta en el precio estelar del petróleo. En términos reales, el gasto fiscal ordinario del primer semestre supera el de los últimos trece años en períodos similares en un 50 por 100, todo esto puede calificarse como un tiempo de expectativas limitadas.



utopYssey (in the beginning...),
Óleo y acrílico sobre impresión digital sobre tela, 1999.